

Enquistamiento de la estructura social en España

“La desigualdad se ha enquistado en nuestra estructura social”. Así de tajante es la conclusión del Informe 2013 de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), que, con el título “Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas”, muestra la dimensión de los efectos sociales de la crisis en las personas más pobres.

DEL ANÁLISIS del comportamiento de la renta per cápita se desprende que las cifras actuales son muy similares a las de hace más de diez años, lo que sugiere que se ha perdido una década. La renta de 18.500 euros que en promedio recibieron los españoles en 2012 es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la de 2001.

Desde 2007 la renta media ha caído un 4%, mientras que los precios se han incrementado en un 10%. Esto ha dado origen a un deterioro de las rentas de los españoles sin parangón en las últimas décadas.

El informe destaca el efecto negativo sobre la renta disponible que han tenido tanto algunos de los cambios en las prestaciones sociales (reducción de las cuantías de la prestación contributiva de desempleo) como las mayores exigencias para percibir el subsidio y el aumento de algunos impuestos (incremento de los tipos marginales del IRPF y de los tipos del IVA).

Para los autores del informe, el rasgo más preocupante de la evolución de la renta en la crisis es el aumento sin precedentes de la desigualdad en su distribución. Así, desde 2006, los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5% en términos reales cada año. Por su parte, el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población.

En el informe se advierte del riesgo notable de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se enquiste en la estructura social, por lo que demandan mecanismos redistributivos.

En cuanto al empleo, el informe subraya que con una tasa de paro superior al 26% –dos veces y media más alta que el promedio de la UE-27–, se trata de los peores resultados de la etapa democrática. Subraya que la tasa de paro del 55% para los menores de 25 años no tiene parangón alguno en los países de nuestro entorno.

La tasa de paro de la persona principal del hogar ha pasado del 6% al 21,4% en 2012. En términos absolutos se ha pasado de 380.000 hogares en los que todos los activos están sin trabajo antes de la crisis a más de un millón ochocientos mil a finales de 2012.

Prueba del empobrecimiento medio de la sociedad es que la caída de las rentas de los hogares ha hecho que el umbral de pobreza descienda desde los casi 8.000 euros para una persona sola en 2009 a algo más de 7.300 en 2012.

Más allá de estos datos, los autores del informe expresan su preocupación por el aumento de la pobreza severa, un hecho que se constata en la evolución del porcentaje de hogares sin ingresos, que pasan de algo más de 300.000 a mediados de 2007 a más de 630.000 en 2012. El porcentaje de hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos pasó del 30% en 2007 al 44,5% en 2012.

El informe confirma que las medidas de contención del déficit público adoptadas por el Gobierno desde 2010 han supuesto un punto de inflexión en el acceso a los derechos sociales.

En este sentido se afirma que los recortes en algunos bienes básicos, la reducción de las cuantías de algunas prestaciones y la exclusión del acceso de grupos de ciudadanos a servicios elementales “han introducido niveles de fragmentación social cuya reducción costó varias décadas y grandes acuerdos sociales”.

Una sociedad vulnerable

EL INFORME concluye que los mecanismos de aseguramiento de la sociedad se han debilitado y las políticas de austeridad han generado una mayor vulnerabilidad de la sociedad española. Tras advertir de que los recortes en los servicios públicos de bienestar pueden suponer una ruptura definitiva para los más pobres, asevera que “solamente seremos democracia si garantizamos los derechos sociales de los más vulnerables”.